

ALGUNAS ANTI-TESIS SOBRE LA CRISIS CENTROAMERICANA (*)

José Luis Vega Carballo
Escuela de Antropología y Sociología
Universidad de Costa Rica

I

Cuando se analiza la literatura recientemente publicada sobre la actual crisis del orden y la legitimidad política en Centroamérica, con mucha frecuencia hallamos la aseveración de que dicha crisis constituye el último capítulo del colapso de los mecanismos que sostienen el llamado modelo "oligárquico-imperialista" de la dominación, construido durante los siglos XIX y XX. Su supone que un nuevo ordenamiento, básico e irresistible, se ha introducido en la agenda de los cambios propicios y necesarios, trayendo consigo un novedosísimo elenco de clases y estructuras sociales en pleno ascenso, las cuales, de una vez por todas, pondrán fin a los vestigios de aquel fatídico modelo. Si este último —continúa insistiendo el argumento— no fuera sostenido forzosamente por una corrupta y trasnochada alianza de los Estados Unidos con sectores terratenientes del tipo *Junker*, es decir, con una aristocracia agrario—latifundista reaccionaria, protegida por los ejércitos a su servicio, entonces, desde mucho tiempo atrás, el bloque histórico de fuerzas emergentes empeñadas en llevar adelante una auténtica revolución modernizadora, hubiera llegado al poder y no estaríamos, en los presentes momentos, enfrentando la turbulencia y el derramamiento de sangre que azota la región. Según esta versión, la posibilidad objetiva de este cambio radical viene desde atrás, quizás desde los años 40 de este siglo, cuando acaecieron las primeras revueltas de las clases medias urbanas contra las viejas autocracias liberales o positivistas. De inmediato la alusión se hace a las "revoluciones abortadas" o "frustradas" de Guatemala (1944—54); de El Salvador y Nicaragua (1944—48); y a las aterrado-

ras consecuencias de las subsiguientes contrarrevoluciones y contrarreformas, emprendidas por las oligarquías en asocio con el imperialismo norteamericano, a fin de garantizarse éstas la continuidad inmaculada de los antiguos regímenes centrados en el poder del sable, el crucifijo y el arado. Sin embargo, también se mencionan como excepciones los casos de Costa Rica y Honduras —de aquella más que de ésta— donde hubo movimientos reformistas relativamente triunfantes, los cuales se abrieron paso en medio de la oposición terrateniente y de los bastiones del conservatismo. Se trata, sobre todo, de los movimientos electorales impulsados por los partidos Liberación Nacional y Liberal de la famosa corriente "aprista", bajo las jefaturas de Figures y Villeda en los años 1948—49 y 1954—57, respectivamente. No obstante, el caso excepcional pareciera seguir siendo Costa Rica, donde se lograron remover los obstáculos al cambio de la antigua aristocracia cafetalera, bancaria y comercial para instaurar una modernidad sostenida por el desarrollo, ininterrumpido e institucionalizado, de un régimen de derecho, sufragio universal y alternabilidad en el poder.

Pocas personas discuten la visión arriba expuesta. En términos muy generales se acepta, bajo la convicción de que, a pesar de múltiples resistencias ejercidas "desde arriba" o "desde afuera", resulta ser aceptable para apreciar el embate de las fuerzas renovadoras decididas a barrer los restos del antiguo orden heredado del siglo XIX. De este modo, los intentos de sostener a ese orden son clasificados de inmediato como anti—históricos, como vanos empeños de prolongar la agonía de estructuras que ya no se mantienen, si no lo es por la fuerza desnuda de las armas y el apoyo exterior. Tal oposición al cambio, desplegada por las clases dominantes, es lo único que choca contra las arremetidas modernizantes de las clases medias, trabajadoras y campesinas, agrupadas como un solo bloque de explotados y expoliados bajo el manto de los

(*) Partes de este artículo fueron publicados originalmente en *Harvard International Review*, vol. VI, No. 3, diciembre de 1983, bajo el título de: "Central America: a choice of Bullets or Ballots".

movimientos populares, político—militares, las coordinadoras de masas, los frentes amplios, etc. Se considera casi como un dogma que, principalmente las clases medias con mayores niveles de instrucción y más progresistas —es decir, esa vastísima categoría social “cajón” que aglutina a las élites industriales, los gerentes de empresas públicas y privadas, los intelectuales y los artistas, los profesionales y los comerciantes y pequeños empresarios, y muchos de los que trabajan por “cuenta propia” en el sector informal de la economía urbana y rural— son los agentes más progresistas, impulsores de las nuevas modalidades de lucha y organización; las clases gestoras que llevan hacia adelante los emergentes sistemas de alianzas dentro de los cuales se piensa que, muy velozmente, serán los obreros y los campesinos (o su alianza), la que pasará al primer plano conforme se transite del reformismo a la revolución, de la democracia burguesa a la proletaria y campesina. Para unos, se trata de lograr el clima político democrático y el progreso económico del capitalismo, cuyas expresiones han sido limitadas en el istmo; para otros, más radicales, el problema a resolver es cómo acortar, o saltar, las etapas para entrar de lleno en la construcción del socialismo. En todas partes pareciera haber llegado el momento definitivo y crucial, cuando el avance de las fuerzas productivas, en conjunción con los retos planteados por nuevas fuerzas sociales autónomas y de avanzada, llenará los espacios que le son vedados desde tiempo atrás por las oligarquías agro—exportadoras y el imperialismo. Por instantes, la imagen se asemeja a la de una película de “cowboys” donde de un lado se agrupan los “buenos” y del otro los “malos”; de un lado el “pueblo” y del otro “la burguesía”; aquí lo “moderno”, allá lo “antiguo”. No falta, claro está, el gran optimismo de que la victoria vendrá al final de cuentas para las fuerzas renovadoras y progresistas de la América Central, como parte de un proceso universal e irreversible. Tal es, en muy breve síntesis, la concepción que predomina en las tiendas de los círculos liberales e izquierdistas, apostados contra el frente de las derechas, viejas y nuevas, que por su parte exhiben una concepción también maniquea, con sus propias variantes, versiones y etiquetas, que no es el propósito analizar en este ensayo, razón por la cual nos concentraremos en la primera.

II

No es difícil darse cuenta de que la concepción vulgar del progresismo, sea liberal o izquierdista,

exhibe como sustento una lógica de análisis muy simplista, lineal y sustancialmente dualista, es decir, *no—dialéctica*, donde puede radicar la facilidad con que se la acepta acríticamente en muchos círculos, mezclada con elevadas dosis de dogmatismo, optimismo, y aun de mesianismo. Este punto de vista estriba en que Centroamérica se halla irremediabilmente ubicada en un mundo esencialmente bi—polar y del lado de las naciones periféricas que llegaron tarde a los procesos de la modernización y que, por ese motivo, se mantiene en muchos aspectos sumergida en el pasado, el atraso tecnológico, social y cultural. Como tal, está destinada a transitar por las rutas de la inestabilidad que genera toda transición que va desde un estadio de subdesarrollo a uno de desarrollo capitalista o socialista. Aún más, resulta que, como la modernización ocurre por medio de una diferenciación de estructuras o fuerzas sociales en lucha, tiende inexorablemente a la polarización, determinada por la constitución de dos “polos”, “extremos” o simplemente “esferas” de la sociedad de las cuales emanan los impulsos mayores de la gran transformación: de un lado se agrupan los sectores tradicionalistas; estáticos y conservadores, abiertamente reaccionarios; y del otro, los sectores progresistas y dinámicos, que van de cara al futuro. Son las tensiones constantes entre estos dos elementos lo que, supuestamente, define hoy día el carácter de las sociedades conflictivas del istmo centroamericano, así como sus alianzas o fuentes de apoyo fuera del mismo, en las grandes metrópolis donde, sea en los Estados Unidos y Europa o en la Unión Soviética, la historia aparentemente ha confirmado la tesis de la irreversibilidad del cambio en favor de lo moderno, tanto en su versión capitalista como socialista. Así es como desde cien, cincuenta o veinticinco años atrás, los países de esta zona dependiente pasan por un camino semejante y ascendente: de la “periferia” al “centro”, de lo “tradicional” a lo “moderno”, siempre en pos de la liberación con respecto al pasado y a quienes han sojuzgado y envilecido, desde los estadios del oscurantismo, a los representantes de las luces.

En el desarrollo de la sociología contemporánea se observa que el *dualismo* tiene antecedentes en las doctrinas del progreso y el evolucionismo desde Vico a Condorcet, de Turgot a Comte, de Spencer a Durkheim, de Hegel a Marx, aunque evidentemente con modalidades diversas según los diferentes contextos históricos e intelectuales. Sutilmente la noción ha llegado a nosotros cargada de teologismo o finalismo, a la griega o medieval, aunque

desplegando atractivos ropajes de cientificismo. Empero, hay algo más que ha hecho del susodicho paradigma un eje de atracción para una infinidad de pensadores y luchadores liberales y socialistas. Y es que, en el presente, no ha dejado de matizar a los procesos ideológicos de quienes intervienen desde esos bandos en los conflictos de Centroamérica, en un tono moral que hace de la refutación o cuestionamiento de las premisas del dualismo, una tarea harto difícil o riesgosa, porque se corre el peligro de ser inmediatamente remitido al terreno de los “infieles” o “herejes”, ya que la misma polarización de las confrontaciones entre las élites dirigentes, pareciera confirmar la validez empírica del paradigma y sus implicaciones teórico—prácticas. El propósito del presente ensayo es, bajo dicho riesgo, el de plantear primero una crítica a la mencionada postura intelectual, política y moral desde la hipótesis de su inadecuación histórica y sociológica para el análisis e interpretación de la coyuntura centroamericana. Y, segundo, introducir una hipótesis más limitada que, a manera de ejemplo, explique algunos aspectos del carácter inestable y conflictivo de las sociedades de la región y arroje alguna luz sobre el caso costarricense, el tratamiento a fondo del cual quedará para otra oportunidad, aunque el lector interesado en el mismo podría consultar el libro del autor titulado *Poder Político y Democracia en Costa Rica* (San José, Editorial Porvenir, 1982), donde se le analiza desde un ángulo histórico y sociopolítico.

III

Permítaseme comenzar dudando de la suposición, divulgada por muchos medios y fácilmente aceptada de que, por lo menos hasta antes de 1978—79, el sector agroexportador de la economía centroamericana venía fallando, enfrentando una crisis de estabilidad y contracción, que lo hacía retroceder como un juego de “sumacero”, con relación a los procesos de la industrialización y la sustitución de importaciones, ocupando en todo ello un papel disminuido y secundario. Porque resulta que, uno de los resultados más sorprendentes de la pauta del rápido crecimiento económico y la diferenciación social durante los años 60 y 70, en los que se observó una gran cantidad de conflictos sociales y políticos, fue precisamente una situación opuesta: el sector agroexportador se comportó muy dinámicamente en términos de producción y captación de divisas para financiar otras activida-

des incluyendo las industriales y lo mismo en cuanto a la diversificación económica y social; Así, se pudieron constatar las evoluciones tan favorables de la caña de azúcar, la ganadería, el algodón y los granos básicos, sectores donde aparecieron infinidad de formas avanzadas de tecnología y organización empresarial del tipo capitalista y más moderno, claro está sin que por ello pudiera avanzarse hacia nuevas modalidades de redistribución de la renta, especialmente de la tierra. No obstante, desde el punto de vista educativo, tecnológico y de comercialización, el sector agroexportador y pecuario tradicional avanzó significativamente, a pesar de la gran turbulencia política y los efectos negativos de la insurgencia combinada con el crecimiento industrial-urbano. Aún más, desplegó una poco usual maleabilidad para adaptarse a las condiciones de penetración y funcionamiento de capital extranjero enclavado en la matriz urbano-industrial de los pequeños “ciudad-estados” centroamericanos, sin rendirse a una abierta y fácil absorción, pudiendo en algunos casos por medio de la intermediación financiera, contribuir a la capitalización de muchas empresas industriales y comerciales de reciente fundación en el área.

De hecho, si tomamos por un momento el valor de las exportaciones agrícolas, notamos cómo su monto se multiplicó 16 veces entre 1950 y 1980, mientras que la industria saltó de un 14% a un 21% del Producto Interno Bruto Regional (PIB—R) y la urbanización se movió desde un bajo 14% a un 43% del total de la población, según indicadores suplidos por las Naciones Unidas. Los informes del Banco Mundial sobre la región dan idea clara de cómo, entre 1970 y 1978 —y aquí de nuevo estamos ubicados dentro de un período de gran inestabilidad pero sin llegar al nivel alcanzado por ulteriores eventos destructivos de las estructuras físicas y sociales de la región—, el valor total de las exportaciones agrícolas creció en 239.1% en contraste con 209.1% y 187.2% en el resto del mundo y en Latinoamérica, respectivamente. Esto no es otra cosa que una tasa de crecimiento bastante satisfactoria, la cual permite en gran medida explicar el por qué del alto crecimiento de un 5% anual del PIB—R durante el mismo período, lo que de modo alguno puede significar un languidecimiento o interrupción de la pauta sostenida del crecimiento y mucho menos de la del propio sector agroexportador.

No olvidemos que, mientras tanto, la industria avanzó velozmente, con promedios anuales que fluctuaron entre el más elevado de Costa Rica con

un 9.1% y el más bajo de Honduras que no pasó de un 5.9%, bajo el innegable estímulo de la apertura y expansión del comercio intraregional, a raíz del establecimiento del Mercado Común Centroamericano.

IV

A pesar de que el proceso del crecimiento económico se dio sin que sufriera cambios substanciales el mecanismo de la distribución desigual u "oligárquica" del producto —lo que pudo haber exacerbado los conflictos e incrementado los sentimientos de privación relativa entre amplias capas de la población— no debe subestimarse, por otra parte, la diferenciación y movilidad social que de hecho debe haber producido dicho crecimiento, aún dentro de los patrones existentes de gran injusticia y discriminación social; puesto que grandes contingentes de fuerza de trabajo representando a nuevos estratos sociales emergieron como parte de la economía y presionaron en el sistema sociopolítico donde comenzaron a plantear sus demandas de mayor participación así como por mejores remuneraciones, servicios asistenciales y privilegios, todo en función de sus intereses. Esto debe de haber contribuido a agitar los climas políticos y de opinión; pero, por razones distintas a las que esgrimen los "mecanicistas", quienes ven una correlación directa y explosiva entre el crecimiento económico y la protesta social. La clave está en darse cuenta de que las redes de la distribución del ingreso no siempre se modifican en una sola dirección conforme avanza la acumulación de capital y la división social del trabajo se hace más compleja. Es muy sencillo decir que, dado el aumento de la producción, dentro de iguales patrones de distribución del ingreso, muchos sectores sociales ven necesariamente empeorar su situación y se frustran en sus anhelos de cambio. Pero lo difícil es comprobar este hecho con la información existente de una manera fiable y sistemática; aunque es de suponer que muchos de los beneficios del crecimiento no se distribuyeron "hacia abajo" en el caso que nos ocupa. Esto no significa tampoco que automáticamente también los diversos sectores sociales, incluidas las clases medias, en todos los casos vieron

por parejo empeorar sus condiciones materiales y culturales de vida. Es posible, que dentro de una distribución elitista del ingreso, los efectos del crecimiento del producto económico tiendan a beneficiar por igual a todos o solo a algunos de los estratos. Más esto debe ser cuidadosamente demostrado y no se proyecta por lo general en un solo sentido, afectando negativamente a un único grupo o estrato. De todos modos, bien se sabe que el solo deterioro de las condiciones de vida de una sociedad o una clase social *no* conduce ineluctablemente a revoluciones o movilizaciones obrero—populares, las cuales se hacen más probables en condiciones de rápido avance de las fuerzas productivas, seguido de una fuerte contracción; o sea cuando las condiciones de vida mejoran y las fuerzas sociales están en mejores condiciones de presionar y combatir.

Si observamos por un momento algunos indicadores de la condición social de los centroamericanos, en términos relativos (no así en absolutos), han existido mejoras importantes, a pesar del carácter concentrador de la acumulación capitalista, tal como lo revela con claridad el (Cuadro No. 1).

Otros indicadores que nos ilustran en el cuadro No.2 la evolución social por país, demuestran la ventajosa posición de Costa Rica con relación a los demás países del área; pero también señalan importantes avances de beneficio general, a pesar de la desigual distribución de los ingresos.

En cuanto a la distribución del ingreso regional (Cuadro No. 3), si exceptuamos a Costa Rica, se observa casi ninguna variación entre los años 1970—78, lo que *no* nos permite afirmar con certeza la tendencia a un deterioro rápido y creciente en las condiciones de vida de los estratos medios y menos privilegiados, por lo menos en lo que respecta a esta variable vista en términos relativos.

Si vemos ahora un cuadro más detallado que nos presenta la SIECA por países, para distintos años entre 1960—80, algunas conclusiones importantes pueden extraerse que *no* dan crédito a la tesis mecanicista que une, una redistribución negativa del ingreso persistente y global desde las clases medias hacia abajo, con la insurgencia social y política en el Istmo Centroamericano (Cuadro No.4).

Cuadro No. 1

CENTROAMERICA: CRECIMIENTO ABSOLUTO DE LA POBREZA (1950-1980)

	1950	% del total	1980	% del total	Aumento 1980-1950
1. NUTRICION (Número de personas severamente desnutridas)...	4.000.000	50	10.000.000	50	6.000.000
2. EDUCACION (Número de analfabetos adultos)	2.600.000	62	4.600.000	43	2.000.000
3. VIVIENDA (Número de personas que habitan viviendas sin agua potable)...	6.500.000	80	12.000.000	60	5.500.000
4. SALUD (Número de personas sin adecuados servicios médico-hospitalarios)	6.500.000	80	13.000.000	65	6.500.000

FUENTE:

Mayorga, Q., Román: *El Crecimiento Desigual en Centroamérica, 1950-1980* (mimeo), México 1981.

Cuadro No.2

CENTROAMERICA: ALGUNOS INDICADORES SOCIALES

Países	Grado de alfabetismo (porcentaje)		Expectativas de vida al nacer (años)		Porcentaje de población con acceso a agua potable	
	1950	1975	1960	1975	1960	1975
Centroamérica	38.7	57.1	49	59	21.9	46.4
Costa Rica	79.4	89.8	62	70	58.2	78.0
El Salvador	38.4	59.7	50	63	20.1	55.0
Guatemala	29.4	48.2	47	57	19.1	32.0
Honduras	35.2	52.5	46	57	15.8	38.0
Nicaragua	38.4	53.1	47	55	12.6	52.0

FUENTE: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.

CUADRO No. 3
CENTROAMERICA: PROBABLE DISTRIBUCION
DE INGRESO
(Dolares de 1970)

	Porcentaje del ingreso	
	1970	1978
20 por 100 más pobre	3.5	3.1
30 por 100 bajo la mediana	13.5	12.9
30 por 100 sobre la mediana	27.0	27.7
20 por 100 más rico	56.0	56.3
5 por 100 más alto a	27.0	27.9

Fuente: Estimaciones del Estudio Regional sobre el Grado de Satisfacción de las Necesidades Básicas en el Istmo Centroamericano, con base en estudios y documentos oficiales y cifras inéditas de los países. (CEPAL/MEX/SEM. 2/5, marzo de 1980, pp. 23)
a. Incluido en el 20 por 100 más rico.

CUADRO No. 4
CENTROAMERICA: ESTIMACIONES DIVERSAS SOBRE DISTRIBUCION
DEL INGRESO POR ESTRATOS FAMILIARES

Estrato	Porcentajes del ingreso											
	Costa Rica			El Salvador				Guatemala		Honduras		Nicaragua
	1961a	1971b	1977c	1961d	1965-1967e	1968e	1974f	1976g	1977h	1967-1968i	1976-1979j	1980k
20 % más pobre	6.0	5.4	3.2	5.5	3.2	3.7	2.8	4.8	3.6	2.3	4.8	3.8
30 % bajo la mediana	10.4	15.4	42.1	10.5	12.0	14.9	9.6	12.5	13.5	8.5	18.7	14.2
30 % sobre la mediana	23.6	28.5		22.6	26.7	38.6	22.8	23.8	27.8	21.4	25.2	27.4
20 % más rico	60.0	50.6	54.7	63.3	58.1	56.8	66.4	58.8	55.1	67.8	53.3	54.5
5 % más rico	35.0	22.8		32.9	28.5	20.6	15.4	35.0		38.4	21.8	24.3
10 % más rico									38.7			38.0

Fuentes: a. CEPAL, Estudio económico de América Latina, 1968. b. Víctor Hugo Céspedes S., Costa Rica: la distribución del ingreso y el Consumo de algunos alimentos, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones, 1973. c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de Planificación del Trabajo y el Empleo, Encuesta de Ingresos, 1977, San José, Costa Rica. Esta encuesta tiene cobertura nacional y presenta la información en quintiles. El porcentaje del ingreso total que corresponde al segundo, tercero y cuarto quintil, respectivamente, es de 8.1 %, 12.9 % y 21.1 %. Por otra parte, en 1978 se llevó a cabo una encuesta de nutrición por el Sistema Nacional de Información, que arrojó los siguientes resultados: 22.5 % más pobre, 5.1 % del ingreso; 36 % siguiente, 20.1 %; 32.2 % siguiente, 36.7 %, y 8.6 % más rico, 38.1 %. d. CEPAL, La distribución del Ingreso en América Latina, Nueva York, Naciones Unidas, 1970. Unidad perceptora PEA. e. Estimaciones de la SIECA sobre la base de INCAP, Información básica de la encuesta sociocultural, 1965 (citado por Jan de Wrisa, en La Distribución del ingreso en los países centroamericanos, GAFICA, El Salvador, 1976). f. PREALC, Situación y perspectiva del empleo en El Salvador, tomo II, cuadro 18, 1975 (únicamente comprende el área metropolitana y la población económicamente activa). g. Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, Política distributiva, versión preliminar, Guatemala, abril de 1975. h. Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, Encuesta de hogares sobre recursos humanos en el Departamento de Guatemala, mayo de 1977 (sólo cubre ingresos salariales). i. CAPAL, Encuesta de ingresos y gastos familiares 1967-1968 (F/CEPAL/L. 115/11), abril de 1975. j. Dirección General de Estadística, Encuesta de ingresos y gastos, 1977-1978, Tegucigalpa, Honduras, 1975 (corresponde únicamente a la ciudad de Tegucigalpa, y no se ponderan debidamente los resultados por factores de expansión). k. Ministerio de Planificación e Instituto Nacional de Estadística, sobre la base de la Encuesta de hogares urbanos de 1980; dicha encuesta abarcó únicamente las principales zonas urbanas de Nicaragua; el cuadro muestra la distribución del ingreso familiar.

Lo que se percibe en el cuadro No.4 es que la participación de los estratos medios y en especial del 30% por encima de la mediana, tiende a incrementarse, pero no así la distancia entre los más bajos y los más altos, lo que ciertamente implica una creciente brecha social muy difícil de salvar a través del tiempo entre aproximadamente un 20% de la población ubicadas en los extremos de la estructura socioeconómica. Es posible que se produjera una tensión difícil de manejar social y políticamente hablando, entre una aspiración generalizada favorable a la igualdad y ésta sesgada distribución de los beneficios del crecimiento económico. Pero no tenemos pruebas sobre este punto, aunque los aumentos notables de la represión política por doquier parecieran darle sustento a esta tesis.

Finalmente, se ha comprobado que alrededor de un 65-70% de la población centroamericana no satisface sus necesidades básicas y entre un 40-50% vive en condiciones de miseria extrema, según los estudios de CEPAL sobre pobreza, publicados en 1981. Pero, como lo ha interpretado correctamente Gert Rosenthal en un estudio sobre la evolución de las economías centroamericanas entre 1945 y 1980, lo cierto es que la situación hasta esa última fecha no era catastrófica en términos de un deterioro longitudinal, sino por el contrario indicaba una cierta mejoría en los niveles de bienestar. Afirmaba concretamente que "los pocos indicadores disponibles, sumados a la certeza de que el ingreso real por habitante en la mayoría de los países centroamericanos ha venido creciendo durante los últimos decenios, sugieren que el porcentaje de la población que vive en 'estado de pobreza' tiende a disminuir". Y agrega que si es cierto que "el 65% de la población de la región vive actualmente por debajo del umbral de la 'no satisfacción de las necesidades básicas', es probable que ese porcentaje haya sido superior 25 o 30 años atrás". Es más bien poco común que dados procesos de rápido crecimiento capitalista, concentrador de los ingresos casi siempre y en una región con desniveles tan grandes como Centroamérica, se diera una apreciable expansión de los sectores medios sin un deterioro observable en términos relativos de las condiciones de vida de los estratos menos privilegiados, mientras que obviamente se preservaba a largo plazo el predominio muy grande de los estratos altos y privilegiados, lo que no está de más esperar dado el estilo de desarrollo adoptado. Más bien, la experiencia centroamericana se revela como muy benevolente y hasta positiva en ese sentido, si se considera en términos históricos y comparativos con lo

sucedido en otras latitudes en condiciones semejantes y hasta de "acumulación primitiva". Se obtuvo, en general un crecimiento relativamente dinámico con una tendencia de los indicadores básicos a demostrar una importante filtración de beneficios hacia abajo, la cual a pesar de que no fue todo lo deseable para quienes esperaban milagros distribucionistas (que en ninguna parte se dan), sin duda dan evidencia de que ocurrieron cambios en una dirección distinta a la que se podría suponer si se sustenta una tesis mecanicista o sencillamente dualista, como la que se viene evaluando en este estudio. No se presta el caso centroamericano, entonces, para conclusiones fáciles, apresuradas o apriorísticas extraídas de la sociología de la modernización, la cual ve los procesos del desarrollo ocurriendo generalmente en una sola dirección a través de etapas sucesivas y predecibles, sin tomar en cuenta particularidades nacionales o regionales. La misma apreciación puede hacerse con relación a las interpretaciones panfletarias de la izquierda que reduce el conflicto centromericano a un simple "fracaso social" basado en el deterioro material de las condiciones de vida de los estratos más pobres, así como en el ineluctable avance de la historia y del sistema mundial hacia el socialismo estatista, real o utópico.

Esta no es la ocasión para hacer más apreciaciones sobre los efectos de la concentración económica sobre todo cuando ésta de suyo se vio interferida por las modalidades que asumió el papel del Estado en las políticas e inversiones relacionadas con el crecimiento de la economía, las cuales son difíciles de precisar sin estudios o monografías de las que no disponemos. Lo que sí debe anotarse es que, con independencia de la configuración estructural e ideológica de los distintos Estados de la región, el sector público creció aceleradamente, lo mismo que su intervención en la sociedad civil, a fin de afianzar y estimular el bien conocido patrón del desarrollo capitalista—dependiente.

De nuevo, encontramos en este proceso como paulatinamente al antiguo sector público, se le fueron añadiendo nuevas instituciones, funciones y objetivos, generalmente sin necesidad de recurrir a vastas reformas tributarias favorables a una redistribución del ingreso. Además, se fueron dejando de lado las reformas administrativas de envergadura, las cuales algunos organismos internacionales propugnaban en aras de una mayor legitimidad, eficiencia y eficacia de las políticas públicas, sobre todo dado el calibre de los problemas que solo la acción estatal podría resolver. Así fue como, entre

1960 y 1980, los gastos en el área del gobierno central —que dejan de lado los gastos de agencias descentralizadas o autónomas, las cuales crecieron más— saltaron de 11.2% del PIB—R a un 16.3% lo cual pareciera indicar que los conflictos sociopolíticos *no* se debieron necesariamente a restricciones forzosas en los niveles del gasto fiscal, sino que quizás por lo contrario, dichos conflictos podrían haber sido estimulados precisamente por disputas alrededor de la *canalización* del gasto de las instituciones estatales, por la manera como este factor generalmente incide sobre aspectos claves de la diferenciación social, la producción y la distribución económica; es decir, sobre las bases mismas del poder político y las posibilidades de su alteración. Hay que destacar en este sentido la gran contribución de la inversión pública a la formación de capital, en cuanto la primera aumentó en un 40.2% en el período 1970-1978, según lo confirma el Banco Mundial, llamando la atención el hecho de que los países donde más se agudizaron las tensiones sociales y políticas, el crecimiento fue muy fuerte: 117.1% en El Salvador; 61.9% en Guatemala; y 17.2% en Nicaragua, en contraste con un 16.7% en Honduras y una posición intermedia de Costa Rica con un 40.0% de incremento. Una conclusión interesante a extraerse de las consideraciones anteriores, es que nada garantiza que la ampliación del gasto y de los aparatos estatales *per se* constituya una garantía de estabilidad o una inversión en seguridad política. Es posible que las disputas alrededor de la *modalidad* que asume la materialidad y la intervención del Estado en la sociedad civil, puedan perfectamente exacerbarse, en la medida en que se alteran las reglas del juego tradicionales como resultado de la aparición de nuevos desequilibrios y de fuerzas sociales vinculadas al medio burocrático directamente, o beneficiadas por la acción del mismo referida a los procesos de la acumulación de la empresa privada. Más aún, nada permite tampoco prever que los elevados niveles del gasto público necesariamente favorezcan a los sectores “modernizadores” del empresariado o de los estratos medios urbanos y rurales de la sociedad. Y esto es notorio en sociedades como las centroamericanas, en donde esos sectores han sido deprimidos o se han mostrado incapaces de conmovier significativamente por la vía de la revolución, o la evolución política, la llamada hegemonía de las clases terratenientes que sostienen el monopolio de la gran propiedad rural y controlan el poder político desde ahí.

Es por lo demás sabido que allí donde ese monopolio no se rompe y no se libera al campesinado en función de las necesidades del desarrollo capitalista o socialista en sus diversas versiones, las funciones estatales amplificadas sin mediar las adecuadas reformas administrativas y tributarias, por lo corriente *refuerzan* la estratificación social y política prevaleciente, lo que significa decir que contribuyen a sostener la posición subordinada de los estratos sub—oligárquicos en unos casos y, en otros, apenas pueden forjar mejores condiciones para que éstos ejerzan mayores presiones competitivas y reformistas dentro del marco del orden establecido e impuesto desde arriba por la amalgama conservadora de los intereses terratenientes, comerciales y foráneos.

Por las razones antedichas, puede concluirse que, opuesto a lo que muchos esperaban del proceso capitalista modernizador en el Istmo, lo más probable es que en vez de decaer, disminuirse o desvanecerse en él, los sectores tradicionales de las sociedades centroamericanas en la posguerra, con el “boom” económico que lo acompañó, más bien se fortalecieron y afianzaron en sus posiciones *al mismo tiempo* que se implementaban las políticas de la industrialización con sustitución de importaciones. *Al haberse vigorizado el modelo agroexportador clásico en el área, sustentado en la exportación de dos o tres productos agropecuarios durante el período; al haberse fomentado la importación de insumos para una industrialización meramente consumista y super—protegida por la legislación del Mecomún; y al haberse orientado el gasto público con arreglo a los intereses creados, no podía darse la por muchos ansiada desaparición de estos últimos en aras del ascenso indetenible e irreversible de las nuevas clases obreras, medias y empresariales portadoras de las llaves de un futuro donde campearían para siempre las fuerzas del progreso y de un victorioso triunfo burgués—capitalista.*

Lo que sí se ha producido desde la introducción del Mercado Común Centroamericano, es una muy novedosa situación conducente a procesos muy vigorosos de diferenciación y desorganización social, en la medida que se observa, incluso en Costa Rica, el surgimiento y proliferación de nuevas fuerzas sociales que se agregaron conflictivamente a las previamente instaladas en los sistemas locales irregionales de poder, a las cuales no lograron desplazar ni eliminar. La clave para entender bien esta situación, que comienza a presentarse desde principios de la década de 1960, estriba en no perder de

vista que entre los países centroamericanos y sus respectivas economías no mediaban intercambios regionales significativos *antes* del establecimiento del Mercomún y de la elevada penetración del capital foráneo a tomar ventaja de las barreras proteccionistas. Pero el Mercomún yuxtapuso a los intercambios tradicionales con el mercado capitalista mundial, centrados en unos cuantos productos agropecuarios de exportación, un conjunto de nuevos intercambios manufactureros que conectaron entre sí a las economías locales antes relacionadas solamente a escala del patrón común de dependencia externa, o sea de un desarrollo “hacia afuera” conectado a las metrópolis que no estimulaba el nacimiento de redes de transporte, comunicación, producción e intercambio propiamente regionales.

Conforme la industria y el comercio interregional se fueron extendiendo y expandiendo, a la antigua estructura productiva con sus grupos sociales, se le fueron añadiendo *dentro* de cada país y entre cada uno de ellos, nuevos sectores modernos a quienes no se podía asimilar fácilmente a partir de la lógica y los espacios de aquella estructura. En muchas ocasiones los intereses agroexportadores con mercados fuera de la región, no titubearon en resolver problemas a costa de las nuevas fuerzas industrializadas que se beneficiaban del Mercomún, como quedó demostrado con la famosa Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras en 1969, la cual vino a desquiciar mucho el plano regional que todavía no se había consolidado. Desde entonces la semilla de múltiples crisis quedó sembrada en el Istmo, con procesos de diferenciación y presiones de mayor participación social y política provenientes de una infinidad de grupos y centros de poder, carentes de lazos de cohesión y solidaridad, y sobre todo de fuerza como para desplazar a los antiguos exportadores y sus aliados locales y extranjeros.

V

Sin embargo, sería exagerar mucho afirmar que todo permaneció estático o sumido en las oscuridades donde domina el partido del orden sin progreso. Hubo algún progreso, pero dentro del orden, según la famosa prescripción Comteana, tan apreciada por los pensadores liberales y conservadores de la región. Algunos antiguos y nuevos actores progresistas se activaron dentro de una marcada subordinación frente a los detentadores del poder y los guardianes del orden y las dinastías. Porque fue en este período de la posguerra cuando se fo-

mentó —aunque siempre a medias y en contubernio respetuoso con los intereses extranjeros— el surgimiento de algunos grupos industriales y de las cohortes técnicas, administrativas y gerenciales de las clases medias urbanas parapetadas en las pequeñas “ciudades—estado” ístmicas, por supuesto, bajo la mirada vigilante y recelosa de las élites militares ajenas a cualquier reformismo o proyecto “anti—gorilezco”. También aparecieron importantes contingentes de clase obrera privilegiada, ubicada en los polos modernos y más dinámicos de la economía urbana “formal”; aunque una contraparte, empobrecida y todavía muy ruralizada hizo también su irrupción en el lado “informal”, prácticamente invadiendo las periferias de las “ciudades—estado”, provocando allí pánico entre los ricos que rápidamente se protegieron en sus casas amuralladas y carros blindados. No hay duda de que estas fuerzas de hecho introdujeron un nuevo peso en la estructura de poder; pero sin desbalancearla totalmente y sin inclinar la historia del futuro hacia su regazo.

Hasta por lo menos el año 1978, antes de la caída de la dinastía somocista, lo que más podemos presuponer para entender este proceso de cambio, es que los conflictos y tensiones surgidos en la posguerra fueron el producto de las rápidas tendencias de la modernización capitalista—dependiente, de las elevadas tasas del crecimiento económico, dentro del marco del orden pre—establecido, donde se vieron fortalecidos *tanto* los viejos baluartes del orden, *como* los emergentes actores y fuerzas sociales. Obligados a una precaria y difícil coexistencia bajo el dominio de las élites conservadoras o asociados con éstas —como es el caso de los industriales y financieros que en la mayoría de los países fueron apareciendo— los sectores en ascenso encontraron rápidamente límites muy bien marcados a sus aspiraciones de mando. Sus ínfulas se vieron, pues, circunscritas a forcejeos y concesiones en los niveles intermedios y bajos de las rígidas jerarquías del poder, en los contextos provistos por las empresas privadas y públicas en expansión. Es muy difícil que acorde con estas circunstancias se pueda mencionar un declinio absoluto, relativo o de grandes proporciones, de las antiguas élites y clases dirigentes forjadas en el período previo al lanzamiento del Mercomún y la industrialización sustitutiva. No es posible vindicar de ese modo la presencia de modelo alguno distributivo del poder, del tipo “suma—cero”, donde un segmento se apropiaba de lo que otro ineluctablemente perdía, en condiciones de irreconciliable tensión

sólo contenida por la mediación neutralista de los Estados Nacionales, cuando así lo permitía la oligarquía y el ejército. Donde se presentaron síntomas de tal juego de poder, por lo general el equilibrio era recapturado velozmente —y cruentamente— por la intervención restauradora salida de los cuarteles, la policía, “la Embajada”, “La Bananera” o la CIA. Los ejemplos abundan, como lo atestiguan los golpes de Estado, los fraudes y las intervenciones ilegales contra los procesos reformistas promovidos por Arévalo y Arbenz en Guatemala, Duarte y Ungo en El Salvador a principios de los años setenta, y por Villeda Morales desde los cincuenta en Honduras. Hasta el mismo Figueres en Costa Rica se vio en apuros en 1949, 1955 y 1972 ante presiones lanzadas desde adentro y desde afuera para frenar su comedido afán de reformar a Costa Rica sin acorralar a la antigua clase capitalista anclada en el periódico “La Nación” y apreciada por los Estados Unidos como símbolo de progreso y flexibilidad adaptativa.

La hipótesis de orientación dualista, de que las discrepancias y choques entre grupos decadentes y emergentes —o simplemente entre grupos prevalentes enfrentados al ascenso de nuevos actores y fuerzas sociales— son no solo inevitables, sino además frontales por así decirlo en un “plano horizontal” donde asumen características de vida o muerte, de triunfo o destrucción fatales, *no* puede validarse para el caso centroamericano y debe tomarse con mucha precaución y hasta escepticismo. Lo que observamos por doquier en esta latitud, es no solo la incapacidad de los nuevos sectores modernizantes para erradicar o desplazar del nivel hegemónico de poder a los antiguos sectores vinculados al modelo agroexportador heredado del desarrollo capitalista dependiente, iniciado en el siglo XIX, o los albores del XX, sino por sobre todo la *marcada propensión de su movilidad social a tomar la forma de los intercambios en un plano “vertical” con predominio de los movimientos cortos, pragmáticos, limitados y fragmentarios, a la hora de impulsarse en la estructura social frente a los “caciques”, “gamonales”, “patrones o “señorones” que manejan los hilos de la asignación de prebendas desde arriba, según el conocido sistema latinoamericano del clientelismo.* Esto implica, básicamente, la vigencia de intercambios que son más de índole “corporativa” que “competitiva”, o que efectivamente conflictiva. No se trata de alterar el funcionamiento de los centros de poder desde las periferias, ni de darle un vuelco total al sistema altamente verticalizado del dominio de “los de arriba”, sino más bien

de forcejear y negociar de continuo el logro de pequeñas ventajas personales, o de pequeño grupo, en el acceso a recursos materiales o simbólicos, y en muchos casos simplemente a una posición social estable o protegida en sus contornos frente a la competencia y los cambios ambientales muy veloces.

Visto de la manera anterior —operando dentro de un contexto de fuerzas sociales y económicas activadas en un amplio espectro por la modernización capitalista tan acelerada de Centroamérica a partir de 1950—, el *clientelismo* puede definirse como una táctica de la dominación de clase utilizada para aminorar, o desactivar, el conflicto interclases, reduciéndolo a una multiplicidad de choques personalizados, particularistas, difusos y asimétricos entre “patrones” y “clientes”. Tales intercambios pueden asumir dimensiones grupales o cuasi— grupales; pero raramente adquieren el carácter de verdaderas luchas clasistas donde los actores se solidarizan, articulan y solidifican sus aspiraciones alrededor de los intereses “horizontalizados” de una clase social determinada. Más bien irrumpen forcejeando prebendariamente, a través de redes que cortan o atraviesan las líneas de clase, en pos de obtener cierta reciprocidad de los dominadores, ante quienes quedan siempre en sujeción en algún intersticio del espacio social y político. Se forman así “redes clientelistas” interconectadas que abarcan los niveles locales y nacionales y se difunden desde las clases subordinadas hasta los dominantes, dificultando o minando el funcionamiento de partidos y organizaciones de base clasista auténtica. Por consiguiente, se alzan como obstáculos al surgimiento de procesos de conciencia de clase y polarización, en determinadas circunstancias históricas que se caracterizan precisamente por la debilidad general de la formación clasista de la sociedad y la extrema dependencia externa que incluye la subordinación de la propia clase dominante “nacional” ante los centros metropolitanos, coloniales o imperiales de poder. En Centroamérica, tal circunstancia histórico—estructural se revela en la fragmentación social que padecen los diversos países, su casi permanente crisis de integración nacional y regional, y el patético fracaso de aquellos proyectos reformistas que buscan romper los clientelismos dominados por el gamonalismo y el caciquismo, para así abrir paso a mecanismos verdaderamente societales de transformación y reintegración que superen de una vez por todas, los nexos y jearquías, piramidales y corporatistas, del clientelismo oligárquico. Es de mayor importancia enten-

der bien estas modalidades del clientelismo centro americano, para no aplicar esquemas simplistas de análisis clasista allí donde no permiten captar la verdadera trama y fundamento de los conflictos, ni medir sus alcances con relación a la posibilidad de transformar o no la estructura social por la vía de los reformismos y los transformismos. Dos aspectos deben destacarse en ese respecto, uno referido al supuesto pasivismo conservador o estático de las clases dominantes frente a los cambios ocurridos, según el cual, derrotadas ya históricamente, son incapaces de tomar iniciativas, volviéndose meramente reactivas o reaccionarias en el sentido puramente negativo, de estar totalmente opuestas a cualquier cambio que no sea de refuerzo al despotismo. El otro aspecto tiene que ver con el carácter autonomo, siempre activo, transformista y revolucionario atribuido casi indiscriminadamente a los movimientos sociales salidos de las clases medias y populares, cuya cohesión y homogeneidad es a veces también exagerada por muchos observadores de la escena centroamericana. Ambas perspectivas son falsas, o cuando menos inadecuadas, para entender los conflictos existentes y sus proyecciones. Además, oscurecen el análisis de las opciones de negociación, entendimiento y reconstrucción institucional que podrían alcanzarse desde el interior mismo de las sociedades nacionales cuando, por ejemplo, los esquemas se prestan para plantear en falso la esencia de la crisis como resultado de una frontal oposición "burguesía pro imperialista" versus "pueblo", u otras por el estilo con que por su parte la derecha replica cuando habla de dividir la población entre "leales" y "subversivos", etc.

Con respecto al supuesto estilo reaccionario o meramente reactivo de las respuestas ante la crisis de dominación por parte de los sectores detentadores del poder, se debe reconocer que lejos de permanecer estos sujetos a posiciones y actitudes meramente defensivas, han buscado activamente la manera no solo de evitar su caída o desaparición, sino de *incrementar* sus capacidades de poder, utilizando mecanismos creativos y sofisticados, ofrecidos por la tecnología política, militar, policial y diplomática moderna, de la cual han recibido abundantes aportes del exterior a través de renovadas alianzas de seguridad. Esto les ha permitido tanto a los centros civiles como militares del poder dominante, tener acceso a medios muy efectivos para amplificar los dominios y manipular mejor las clientelas, mayormente entre las clases medias de la ciudad y el agro, en donde los burócratas y profesionales así como los pequeños y medianos agri-

cultores han mostrado buena propensión a tornarse en fieles socios capitalistas y aliados que soportan a los grupos para-militares y sus técnicas de contrainsurgencia, cuando éstas se requieren para imponer la vía del terror, la aceptación de la ley y el orden, según las versiones de un clientelismo cada vez más represivo, particularmente en Guatemala y El Salvador.

De ese modo, se han formado nuevas coaliciones de poder, con renovados centros y periferias, y procesos generadores y re-generadores de poder que hasta el momento han impedido (excepto quizás en el caso de Nicaragua) que alguna fracción desde abajo pueda provocar una verdadera reestructuración del sistema de poder o una redistribución radical del mismo que altere las jerarquías prevalentes en la región. Como una regla general, se han dado acomodos dentro de las mismas estructuras de dominación; pero las élites casi siempre han logrado mantener sus meta-poderes; es decir, la capacidad para estructurar y reestructurar las relaciones sociales a nivel de la sociedad global, sin que cambien en lo esencial las reglas del juego o el orden institucional básico controlado desde la cúspide. En las alturas de las jerarquías todavía se mueven actores bien conocidos, que permiten los cambios mientras no toquen sus intereses bien consolidados. Enrique Baloyra los denomina el *núcleo central* de las coaliciones exclusivistas o "reaccionarias". Dicho núcleo está compuesto "por los agricultores más importantes, quienes monopolizan el control de las asociaciones cumbres del sector privado, ganaderos, grandes almacenistas ligados al agro, financistas y banqueros, cuyos clientes o factores principales se ocupan del comercio exterior y de la especulación inmobiliaria, ex-funcionarios públicos y militares retirados que han desfalcado al erario público, e individuos encargados del aparato represivo". Como se ve, no se trata de la clase dominante tradicional en su forma oligárquica pura, sino de un núcleo diferenciado que aquella hegemoniza con ciertas dificultades, pero casi siempre con relativo éxito, especialmente en momentos de crisis. Tiene así razón Baloyra al afirmar que "no es este un grupo 'tradicional', aunque puede parecerlo a simple vista. No es simplemente —agrega— una oligarquía compradora, ni una vasta red de amigotes que monopolizan el mercado y abusan del poder político. Se trata de una coalición que tiene que mantener en equilibrio unas relaciones bastante complicadas con la *institución* militar, con otros sectores económicos no incluidos en su núcleo central, pero cuya colaboración de clase

puede ser vital en ciertos momentos, y con los actores que aparecen en la periferia de la coalición... En la periferia de la coalición reaccionaria encontramos a fracciones burguesas de origen más reciente en los sectores industriales, financieros, del transporte, los servicios y hasta de la agricultura”.

Si ahora enfocamos las condiciones prevalecientes en los niveles más bajos del llamado “poder popular—revolucionario”, allí han proliferado infinidad de organizaciones político—militares, frentes de masas, “coordinadoras”, etc., combinando técnicas y recursos de la resistencia civil con las militares de corte ofensivo—defensivo según las “leyes” de la llamada guerra prolongada, la cual persigue culminar en una insurrección al estilo sandinista en Nicaragua o algo parecido (huelga general, ofensiva total, etc.). Pero, si nos movemos más allá de las imágenes propagandísticas y los planteamientos sectarios de estos novedosos organismos, orientados a renovar los sistemas de alianzas y apoyos en favor de la revolución centroamericana, el panorama que se percibe es de gran fragmentación y fluidez, al estar plagadas de luchas intestinas, guerrillas entre guerrillas, infinidad de centros de poder, bizantinas disputas ideológicas de corte catequístico, y grandes dificultades para ir logrando la aspiración de unidad y cohesión que el centro—izquierda requiere para abatir a la alianza oligárquica parapetada en las “ciudades estado”, convertidas en los últimos años en auténticos *garrison states* con la ayuda de los asesores militares norteamericanos. A pesar de que se han promovido y logrado avances hacia la unidad de estas múltiples y dispares fuerzas insurgentes —muchos de ellos atribuidos directamente a los esfuerzos efectuados por Fidel Castro desde La Habana— lo cierto es que los fenómenos de la “centrifugalidad” clientelista predominan allí también visiblemente, como rasgo estructural que se proyecta ineluctablemente al plano de lo ideológico y de la lucha por el poder político. Son elementos que aunque podrían considerarse constitutivos de la “sociedad civil” infunden a la “sociedad política” en pugna una modalidad disgregante y amorfa, lo que afecta negativamente la efectividad de las arremetidas contra los grupos dominantes. Los mismos problemas del patronazgo, de las *cliques*, logias, camarillas o facciones, se viven en estos niveles bajos del poder, donde además la corrupción no deja de hacer su aparición como en casi todo sistema de clientelas. Nadie duda de que es muy difícil bajo tales circunstancias que desde dichos niveles emer-

jan las acciones y las políticas con raíz definida de clase social y con alcance nacional, requeridas por un proceso efectivamente revolucionario para imponerse a las batallas de las pequeñas maquinarias y séquitos poseídos por los caudillos, jefes, comandantes o héroes de los movimientos de resistencia. La situación se hace más compleja cuando se introducen en escena factores étnicos, lingüísticos y religiosos de diverso grado de primitivismo o actualidad, que son realidades sociológicas salidas de la misma estructura de las sociedades centroamericanas, creando mayores dificultades para la generación de “arcos” clasistas y nacionales de entendimiento y solidaridad. Si por alguna razón estos emergen trabajosamente, es frecuente que fracasen ante las presiones devastadoras y disgregadoras del faccionalismo, la exuberancia de los intereses irreconciliables de grupos informales, las propensiones a tejer redes personalistas que fomentan la desigualdad y pluralidad conflictiva a través de infinidad de patronos, jefes, caudillos, intermediarios, seguidores, leales, etc. cuyos lazos provienen de solidaridades verticalmente establecidas que entorpecen la formación así como el funcionamiento estable de organizaciones basadas en categorías clasistas u ocupacionales de corte definido o específico.

No estamos, sin embargo, ante la presencia de mecanismos absolutamente divorciados de contenidos y proyecciones de dominación de clase, puesto que en términos de la dirección y los resultados de los procesos de lucha, estas manifestaciones del clientelismo popular favorecen el *dominio de clase* de los grupos más poderosos, en la medida que se prestan a las manipulaciones verticalistas y desintegracionistas que estos mismos grupos saben proyectar hacia abajo, para mantener así las divisiones y las incertidumbres que fragmentan las acciones contestatarias. Por eso afirmamos que en este contexto centroamericano son muy claras la subordinación y la “funcionalidad” de los principios operacionales del clientelismo, en favor de la continuación del tipo de sociedades existente. Aunque también pueden operar en un sentido opuesto, allí donde han sido hábilmente utilizados como en Costa Rica, con la finalidad de forjar presiones que han contado con el aporte de movilizaciones parciales de masa orientadas a arrancar concesiones y alcanzar transformaciones de contenido redistribucionista en favor de las clases medias y populares. En este caso —y esto debe anotarse muy claramente— el sistema de clientelas mismo ha sido puesto en uso pero para provecho de los partidos

políticos, facilitando la existencia de un sistema deliberado de integración política y control desde arriba de diversos sectores de clase, en especial de clase media y obrero-campesina. Pero para forjarse el proceso ha tomado mucho tiempo, hasta elaborar la imagen de que el sistema político costarricense no está controlado nítidamente por intereses incontrastables de clase, horizontalmente contrapuestos y antagónicos. Una crisis de integración, coordinación y eficiencia del sistema político puede hacerse presente en cualquier momento, aunque con ribetes distintos a como usualmente se presenta en los otros países centroamericanos, donde la estructura clasista y el clientelismo muestran tendencias mucho más represivas y regresivas, es decir, más propensas a desatar graves crisis de legitimidad política e ideológica.

Lo anterior trae al tapete de la crítica algunas apreciaciones excesivamente optimistas sobre el papel transformador con supuestos intereses nítidos de clase social, que juegan las organizaciones político-militares de la nueva izquierda centroamericana, sean de orientación religiosa o secular. La posición ante las mismas debe partir del hecho de que no necesariamente constituyen entidades que calcen dentro del modelo de organización clasista simple, al que muchos desean asimilarlas, sino que participan de una naturaleza social muy compleja y contradictoria al extremo, que no se presta fácilmente a clasificaciones convencionales.

VII

Dejando de lado a Costa Rica, país en el cual ha triunfado una revolución burguesa y de clases medias, las otras sociedades centroamericanas son modelos vivos —aunque de museo— de sociedades despóticas, donde los procesos de la formación del Estado y de la industrialización han tenido efectos muy diferentes de los que podrían esperar los ingenuos y optimistas defensores de la tesis del dualismo modernizador. Los actores sociales y políticos no se muestran aquí tan agresivos y penetrantes como en los países centrales, sino más *acomodaticios* unos hacia salvaguardar las ventajas que tienen en sus anclajes tradicionales, los otros en hacer por igual, con respecto a los objetos de conquista en los procesos de la movilidad social, particularmente en los “polos” más dinámicos y avanzados de sus sociedades, que son los más estrechamente ligados a las inversiones e intereses foráneos. La resultante conflictiva de la lucha de intereses de estos sectores, que para algunos son aparenacialmente

monolíticos, no puede dejar de ser más desconcertante. Porque, a pesar de ser reconocidos como sectores populares, son a la vez sectores privilegiados. Encrustados en “enclaves” forjados por el capitalismo transnacional, se alejan de cualquier inclinación a movilizar fuerzas en contra de la dominación internacional, la misma de la cual obviamente se benefician de muy variadas maneras. En este sentido, no todo el “pueblo” puede llegar a estar de parte de la “revolución”; mucho menos del nacionalismo que caracteriza a las versiones más radicales del populismo centroamericano. Aparecen muchos sectores de clase media y popular inclinados al conservatismo, así como dispuestos a sostener alianzas provechosas con el imperalismo, neutralizando la bandera del nacionalismo de los sectores más radicales, aislados de esas alianzas ya que no pueden ofrecer ventajas alternativas inmediatas desde sus posiciones extremas y riesgosas. Dado que los militares son sin duda los más sobresalientes y claros guardianes de clase media de estos vínculos con los intereses dominantes, existen restricciones significativas producidas por la situación, que facilitan la militarización y la dependencia de los países con apoyo de aliados populares tanto como oligárquicos.

La realidad hay que reconocerla tal cual es: las sociedades centroamericanas son indudablemente sociedades de clase; pero las clases más bien se presentan como organismos polisegmentados y múltiples, plagados de divisiones interiores basadas en los intereses contrapuestos que se manifiestan a lo largo de nexos personalistas de liderazgo y control, de factores geográficos, étnicos, religiosos y familiares que impiden la cristalización de colectividades y organizaciones donde predomine, ante todo, el vínculo solidario desprendido de una determinada relación con respecto a los medios de producción. Al mismo tiempo encuentran la resistencia de la coexistencia conflictiva de lo antiguo y lo nuevo, de lo estático y lo dinámico, de lo que vegeta al calor de las antiguas formas de la producción pequeño-comercial y artesanal, y lo que se mueve impelido por las modernas fuerzas del maquinismo y la organización industrial y comercial. Implantada por la inversión foránea dirigida desde fuera del ámbito nacional por los grandes imperios corporativos de los Estados Unidos, Europa y Japón, la llamada “crisis de la integración nacional” reconocida en nuestras latitudes por Osvaldo Sunkel hace algunos años, es una realidad cotidiana en Centroamérica y afecta la naturaleza y la orientación de sus estructuras sociales, así como de los

movimientos sociales populares que se mueven en medio de grandes ambivalencias. A su vez los grandes desbalances que la misma dependencia externa produce entre las "ciudades-estados" y sus periferias, hace muy difícil conciliar los intereses obreros y de las clases medias privilegiadas, o de éstas con los del campesinado; es decir, las distancias regionales se traducen en distancias sociales y viceversa, lo que impide la unificación nacional, tanto como el surgimiento de conciencias de clase que no sucumban fácilmente ante las promesas del reformismo o los procesos de co-optación (el "transformismo" de Gramsci) que manipulan continuamente las clases dominantes a través de los mecanismos del clientelismo. También el capital foráneo puede oponer frentes con apoyo popular al nacionalismo y al radicalismo político, ya que cuenta en el medio laboral con contingentes privilegiados de nueva clase obrera y media, al frente de los cuales se pueden colocar líderes, o pseudo-líderes, bien financiados que construyan obstáculos civiles y para-militares contra el desborde de otros sectores populares que se inclinan a la ruptura del orden establecido y de la dependencia externa. Por estas razones, los movimientos sociales y populares son frágiles, además de que ya lo dijimos, se ven desgarrados con mucha frecuencia por las disensiones y las contradicciones internas, producto de la heterogeneidad estructural misma de sociedades polisegmentadas y múltiples, altamente penetradas por la influencia extranjera que se traduce en distintas formas de "colonialismo interno". Esto no significa que sea imposible observar el surgimiento de movimientos sociales que persigan sobreponerse a todas estas desventajas; pero deben éstos enfrentar problemas de cohesión y orientación muy difíciles de manejar aplicando tácticas muy heterodoxas, si desean subsistir a las múltiples tensiones derivadas de los encontrados intereses culturales e ideológicos que se producen (y reproducen) en sus bases, así como en los otros niveles jerárquicos de las organizaciones, los "frentes" o las "coordinadoras". Si difícilmente pueden establecer hegemonías duraderas en la "sociedad civil", mucho menos podrán imponerle a la "sociedad política" una dirección ideológica definida. Ahí tienen su gran reto y su gran limitación.

VIII

No podemos extendernos más en las apreciaciones que venimos haciendo sobre el comportamiento ideológico de los actores populares y de clase media en Centroamérica. El propósito de las

mismas es polémico y apenas introductorio. Volvamos más bien la atención, para finalizar, hacia algunas consecuencias que podemos extraer de lo antes examinado.

No debe sorprenderse el observador de la escena contemporánea de que, en los países de la región, haya necesidad muchas veces de considerar a los distintos grupos que se disputan el poder en los niveles intermedios y bajos de las jerarquías clientelizadas como verdaderas extensiones o "apéndices" de los meta-poderes de los sectores ubicados en las cúspides, por medio de los cuales éstos organizan su inestable hegemonía en la medida que retienen la capacidad para estructurar dentro de marcos establecidos, las relaciones sociales fundamentales y los intercambios políticos que podrían considerarse legítimos, o al menos tolerados por las élites. Los contendientes y retadores del poder padecen, pues, de intrínsecas y extrínsecas limitaciones para acceder al mismo en virtud de que sus embates no son, ni pueden ser, frontales ni se dan horizontalmente organizados en un sentido dualista, clasista o efectivamente nacional susceptible de darle un vuelco cualitativo a la estructura dominante del poder. Es un hecho bien reconocido, por ejemplo, que en El Salvador y Guatemala, los grupos emergentes que han planteado retos a los sectores de élite han sido reclutados por lo general de las filas de los "segundones" pertenecientes a las familias oligárquicas, o del conjunto de las llamadas "familias respetables" que han suplido de intelectuales orgánicos a las clases históricamente dominantes, tanto laicos como religiosos, civiles como militares, a los cuales observamos jugando papeles sociales y políticos muy importantes a partir de los años 40 o 50 de este siglo, promovidos en muchas ocasiones por las mismas revoluciones liberales. Se trata de círculos pequeño-burgueses, pero prestigiosos y relativamente bien educados, beneficiados por los procesos de cooptación de los altos círculos, particularmente en el lado urbano de la sociedad, desde el cual bien es sabido que se maneja el sistema político y de dominación nacional. Estos círculos sub-oligárquicos son leales al sistema y se diferencian poco de sus homólogos más radicales, ubicados hacia el centro-izquierda, cuya absorción dentro del sistema vigente de poder y privilegio es más lenta y difícil, pasando por períodos de insurgencia y contrainsurgencia, electoralismo y contra-electoralismo, reforma y contrarreforma; pero su asimilación eventual al sistema no es menos predecible por esta razón, mayormente cuando su comportamiento ideológico es alta-

mente sectario y los lleva prontamente a descorazonarse y frustrarse, para buscar una mayor tranquilidad en la etapa de su llamada "madurez política" o "emocional". En este último caso, las metamorfosis son sorpresivas y abundantes en estos y otros países latinoamericanos. Son, en fin, distintos juegos y estratagemas con arreglo a los cuales se proyecta la reproducción del sistema y se logra arrancar algunas concesiones individuales limitadas en el curso de la vida, para no hacerla tan carente de esperanzas de movilidad social ascendente y demostrar que el sistema puede ser permeable, eso sí, solo ante ciertas muestras de docilidad y buena voluntad para adaptarse.

Si examinados el caso costarricense, en el cual aparentemente los cafetaleros no decidieron tornarse industrialistas durante el *boom* de la apertura hacia el Mercomún centroamericano, encontramos que sus hijos sí han optado por novedosas vías de reintegración modernizada en el sistema, sea en el mismo campo agroindustrial, como financistas de vastos proyectos urbanizadores, o como neo-exportadores dinámicos apoyados por el capital transnacional. Hemos visto a los hijos y nietos de los viejos barones del café mezclarse sin muchos distinguos con los recién llegados a los altos estratos de la jerarquía social, por la vía de la educación y el prestigio profesional. En otros casos, han sido atraídos por la política neo-conservadora o liberal en oposición al partido de los socialdemócratas, a quienes ahora califican despectivamente de "social-burócratas" cuando critican el exagerado crecimiento del Estado que hizo posible la expansión de las clases medias urbanas y resolvió el problema del empleo en aras de la estabilidad social y política del período de pos-guerra. Todo esto ha permitido conformar en Costa Rica un renovado centro político, que es el responsable directo del rechazo electoral que han recibido los extremistas de izquierda y derecha. En ese centro político se mezclan antiguas y nuevas generaciones, emergentes y descendentes estratos y fuerzas sociales, en medio de un dinamismo movilizador de opiniones diversas, alentado por un bien extendido sistema de medios de comunicación colectiva. Después de la guerra civil de 1948, en la cual triunfaron parcialmente los social-demócratas jefeados por Figueres (más tarde lo serán por Orlich, Oduber y Monge), las estructuras de dominación se ensancharon para dar paso a las clases medias y a sus representantes, organizados en grupos de presión y en varios partidos políticos fuertes. En vez de desaparecer, el clientelismo tradicional se fortaleció a lo largo y

ancho de dichas estructuras cambiantes, dentro de las cuales aparecieron nuevos actores por agregación, sin que se eliminaran los antiguos. Por el contrario, el juego democrático de los partidos se vigorizó en virtud de este cuadro a veces confuso y el sistema político compuesto por el Estado, los grupos de presión y los partidos, logró elevados niveles de legitimación, aunque no tanto de eficiencia.

Aún en la antigua Nicaragua del *boom* algodonnero de los años 50 y del impacto subsecuente del Mercomún, se abrieron múltiples oportunidades de ascenso, limitadas solamente por el dominio que sobre la cúpula de la jerarquía mantuvo la dinastía de los Somoza. Muchos empresarios anti, o no-somocistas, quienes tenían orígenes oligárquicos en las tiendas liberales o conservadoras de las principales ciudades, se atrevieron desde los años 70, a competirle fuertemente a la dinastía y poner nerviosos a sus guardianes, la poderosa Guardia Nacional. Fue solamente la inflexibilidad del gran jefe heredero de la dinastía quien se negó a negociar hábilmente con estos nuevos contendores pro-capitalistas en beneficio de una reconstitución del bloque de dominación, lo que abrió las brechas por las cuales se colaron "desde abajo" los sandinistas hacia la cúpula del sistema, en la cual reinan ahora con un programa de transformaciones que hará casi imposible que la neoburguesía nicaragüense tenga posibilidad histórica real de desenvolverse y menos de organizarse políticamente. Lo mismo es posible que suceda con los obreros y campesinos, controlados ahora por una férrea maquinaria político-militar-ideológica al frente de la cual se percibe ya una "nueva clase" en formación.

Los cambios revolucionarios son aquellos en los que una clase social desplaza a otra, poniendo al frente de un Nuevo Estado a los antiguos explotados y dominados. En Centroamérica no hemos visto todavía un proceso de esta naturaleza, por más que los movimientos sociales recientes lo proclamen casi como un hecho en su propaganda. No es esto lo que está a la orden del día. En la agenda de lo que está ocurriendo observamos más bien acomodados y reacomodados del tipo clientelista, en vez de cualquier otro fenómeno radical de movilidad social o de transformación cualitativa-estructural de las sociedades. Ante todo se observa la negociación, la confrontación limitada, la cooptación o el "transformismo" gramsciano, la absorción de nuevos líderes y clientelas, los forcejeos oportunistas y las escenas dramáticas de una conversión, o reconversión, oligárquica o neoconservadora, de arrepentidos radicales. Son pocos los visos de un proceso

único o con distintas manifestaciones y *tempos*, en el cual los actores ubicados en las clases medias converjan en la realización de actos revolucionarios de clase y de gravitación nacional o regional. Quizás Nicaragua se aparte un poco transitoriamente del patrón general; pero ya se observan allí incluso las tendencias clientelistas y verticales tradicionales. La revolución que se inició con cambios radicales, enseña ahora los indicadores del proceso, por lo demás normal, de formación de una nueva clase dominante salida de las antiguas familias oligárquicas y de clase media. Sus artífices son los hijos de las prestigiosas familias conservadoras o liberales, envueltos en distintos ropajes ideológicos, con los que tratan de dominar a los obreros, los campesinos y las minorías étnicas que logran subsistir en el territorio nacional. De todos modos, en el caso nicaragüense, al igual que en el salvadoreño, creemos que los actores centrales están dispuestos a negociar en las alturas y reacomodarse, si logran encontrar fórmulas adecuadas de integración nacional y de reconstrucción de sus respectivas clientelas (incluyendo los ejércitos y la iglesia). Posiblemente observemos muchos cambios sorpresivos y movimientos pendulares yendo de la confrontación a la negociación, mayormente si en este sentido presionan poderosos intereses foráneos; todo lo cual estaría resolviéndose no obstante de acuerdo con las reglas tradicionalmente aceptadas en los sistemas clientelistas. Al menos por períodos cortos de tiempo la inestabilidad que los caracteriza se exagera cuando las estructuras de clase se van modificando y nuevas fuerzas sociales emergen en la arena política. Porque tampoco hay duda de que han sucedido cambios estructurales importantes en la región, como lo hemos indicado anteriormente. Lo que acaece de que éstos no producen mecánicamente los esperados cambios en la cultura y las alianzas políticas, mucho menos en los estilos de manejo del poder, el cual siempre se ejerce dentro de marcos institucionales que no pueden modificarse ni crearse de la noche a la mañana si se aspira a la legitimidad.

Nos queda por mencionar en esta breve síntesis, a la República de Honduras, la típica *Banana Republic* de la historiografía política norteamericana. Sin embargo, aquí observamos más o menos las mismas tendencias, a pesar de que el país no tuvo una poderosa y floreciente oligarquía terrateniente cafetalera, como sí la tuvieron sus otras hermanas del Istmo. Lo que la ayudó a ser una república semi-colonial, fue el establecimiento de un vasto "Imperio del Banano" en su costa atlántica, el cual

se encargó de forjar el Estado dejando relativamente libres de actuar a los intereses localistas sobre todo para que pudieran entenderse con otros actores sociales y políticos que fueron surgiendo en la posguerra, hasta conformar una red de clientelas sumamente compleja que hoy día apenas pueden controlar los militares, quienes son parte integral de la misma. Dentro de esa red se han ido incrustando, o han ido apareciendo, una variedad de élites, ninguna de las cuales ha podido monopolizar el poder como lo han hecho las oligarquías cívico-militares de El Salvador y Guatemala, o la dinastía somocista en Nicaragua. Las raíces de esas mini-élites se hunden en las ciudades y en el campo, en los antiguos y en los nuevos centros de poder (como San Pedro de Sula), y en el plano nacional se perciben sus esfuerzos por organizarse mejor y competir a través de un débil régimen de partidos, cámaras, sindicatos, ligas campesinas y cooperativas al cual debemos agregar el ejército, guardián indiscutido del orden y hasta de la democracia que de cuando en cuando se ensaya como fórmula para romper algunos impasses difíciles, o ceder ante presiones internacionales. La fisonomía del sistema es altamente compleja y difusa, matizada por giros hacia el populismo seguidos por retornos al autoritarismo, sin que exista todavía un centro de gravedad político bien institucionalizado que amarre a un número sustancial de clientelas a un proyecto común de desarrollo nacional. La actual presencia norteamericana, que ha transformado el país en un campo militar y en escenario de eventuales confrontaciones bélicas regionales, no presagia nada positivo para los esfuerzos de construcción nacional, sino más bien propenden a implantar desde allí un modelo neo-colonialista para la región que permita contar con una base de intervención y control militar comparable quizás con la ubicada en el Canal de Panamá; aunque evidentemente mucho más volcada hacia el interior de la región centroamericana por razones estratégicas y geopolíticas. Desde esta realidad en pleno desarrollo, la institucionalización y estabilidad del sistema político hondureño parecieran quedar en espera de mejores tiempos, cuando las élites puedan ampliar un poco más sus márgenes nacionalistas de maniobra y establecer un grado más elevado de consenso e integración nacional.

IX

A estas alturas de nuestra argumentación surgen una serie de intrigantes preguntas: ¿de dónde

arrancan efectivamente las dificultades de las sociedades centroamericanas para establecer mecanismos políticos estables y de consenso entre sus élites, a pesar de los múltiples canales de movilidad social que median entre los sectores dominantes y subordinados? ¿Por qué muchas veces las élites luchan tanto o más entre ellas que con sus contendientes ubicados más abajo en las jerarquías? ¿Por que las élites pierden periódicamente control sobre estos últimos, independientemente de las condiciones que prevalezcan en la economía, sea en tiempos de expansión o de contracción, de auge o de crisis? ¿Por qué es la intervención foránea tan fuerte en la zona, o lo que es lo mismo qué factores contribuyen a que las élites en conflicto permanente tiendan a buscar aliados externos que inclinen en su favor el resultado de las luchas que de otra manera no podrían ganar a pesar de que en este proceso pierdan la autonomía y empeoren las condiciones de la viabilidad nacional, entre otras cosas? En fin, ¿a qué se deben los conflictos que adquieren peligrosamente dimensiones nacionales y regionales incontrolables, rematando en la militarización continua de los mismos y la destrucción de múltiples esfuerzos orientados a levantar formas civilizadas y progresistas de institucionalidad política civil?

No importa cuál sea el tipo social específico de las sociedades centroamericanas, la clave del problema de la estabilidad y la legitimidad política parece yacer en la naturaleza precisa de los mecanismos o factores que establecen (como en Costa Rica) o que impiden establecer (como en otros países) *nexos duraderos y solidarios* entre distintos conjuntos de actores o grupos sociales ubicados en dimensiones verticales y horizontales de las respectivas jerarquías sociales y de poder. Obviamente, que nos referimos a aquellos actores que cuentan con recursos y capacidades suficientes y a la mano para amenazar o alterar de hecho el curso normal de los intercambios dentro del sistema político y la correspondiente distribución del poder. Más aún, los vínculos duraderos que nos preocupan son aquellos que tienen que ver con la ejecución de funciones políticas concretas orientadas a reducir la impredecibilidad o "azarosidad" de las interacciones entre los actores poderosos en pugna, principalmente las siguientes: las funciones de la formación y amalgamación de las élites en distintos campos de actividad; de amplia legitimación ideológica (nacional); y de movilización y participación popular ordenada. La atrofia o incumplimiento en un sistema político de alguna de estas funciones, o

tareas fundamentales, conduce a la quiebra del orden público y a la imposibilidad de llevar la economía hacia pautas de crecimiento sostenido. En otras palabras, fomenta la inestabilidad y el caos al tiempo que confirma la tesis que se está poniendo en claro en Centroamérica hoy día y en otras regiones del llamado Tercer Mundo, de que la estabilidad política es un *prerrequisito* del crecimiento económico y el desarrollo social, sin importar si dicha estabilidad se ha logrado con o sin necesidad de pasar por un período de violencia revolucionaria, o de cualquier otro tipo de guerra interna y externa. Tal ha sido, en nuestra opinión, la regla histórica. El consenso es por lo común producto del conflicto; en especial de un conflicto que plantea como alternativa la reconstrucción institucional de los nexos solidarios entre los actores por un período relativamente largo de tiempo que ojalá abarque una cuantas generaciones.

En sociedades relativamente complejas, donde el proceso de modernización ha establecido una división social del trabajo por encima de los círculos localistas y comunales, el mecanismo que por excelencia puede llevar a cabo las funciones antes mencionadas es el que Antonio Gramsci llamara el "Príncipe Moderno", a saber, el *partido político*. De tal modo que la principal hipótesis que proponemos en este ensayo es que la crisis persistente del orden político, de la integración y la participación social en Centroamérica se genera no tanto desde el plano estrictamente económico, sino que se asienta en la debilidad de los partidos políticos y en los fracasos de las acciones orientadas a fortalecerlos y en muchos casos a crearlos, con la clara excepción de Costa Rica. Hasta el presente en este país se ha consolidado un régimen de partidos y participación que nos permite hacer comparaciones útiles con las otras sociedades para efectos de avanzar en la explicación de muchos fenómenos de alteración del orden, los cuales se presentan como algo excesivamente anormal para un observador externo. Así, por ejemplo, en la sociedad costarricense fue posible antes de terminar el siglo pasado, retirar los militares del campo político-electoral; desarrollar los gérmenes irreversibles de un sistema de partidos; propiciar un crecimiento institucional y funcional del Estado a pesar del liberalismo imperante en la política económica del período; introducir reformas anticipadas a muchas presiones populares en favor de la redistribución del ingreso; entre otros logros importantes que permitieron el surgimiento y consolidación de un sistema político que se tornaba más institucionalizado y legitima-

do, al tiempo que proliferaban nuevas fuerzas y actores sociales. En el resto de Centroamérica el panorama ha sido distinto y trágico para los esfuerzos de construir institucionalidad política civil, democrática y estable. Las crisis de la dominación no han surgido aquí necesariamente porque las élites rural—urbanas de los siglos XIX y XX no hayan aspirado a promover el crecimiento económico acelerado o hayan siempre fracasado al intentarlo; ni porque se hayan rehusado tercamente a participar en procesos de modernización alejándose con ello de las principales corrientes de la historia; tampoco porque las hayan desbancado de los principales centros de poder económico y político los embates de fuerzas esencialmente renovadoras capaces de retarlas en el plano hegemónico, sin que los antiguos mecanismos de la dominación hayan sido eficaces para contenerlas. Esto lo hemos discutido con anterioridad y no vamos a insistir más sobre el punto.

Existe, sin embargo, una condición muy importante que ha influido decisivamente en la evolución de las sociedades centroamericanas, donde no han surgido (o no han podido subsistir) sistemas políticos pluralistas y participativos, de corte liberal o republicano, que no sean meras fachadas para encubrir dictaduras oligárquico—militares. Se trata de una decisión, hasta cierto punto premeditada o consciente, tomada en los círculos dominados por los intereses de las clases terratenientes ultraconservadoras, decisión que ha repercutido muy negativamente sobre los partidos políticos y el liderazgo civil. No es otra que la inclinación de encargar a los militares (primero en su forma de puros dictadores personalistas, luego como institución especializada y profesional) las funciones de control de la sociedad civil y política, de la ley y el orden, del manejo de las tensiones sociales y de múltiples centros de poder burocrático y técnico, en clarísimo detrimento del poder que los partidos políticos y otros órganos de la sociedad política (incluyendo la burocracia pública) pueden llegar a jugar en ese mismo sentido, como lo han hecho en Costa Rica y en otros países donde la hegemonía se ha construido distinto; es decir, donde la clase dominante ha asumido un control más ideológico y económico que represivo de la sociedad, brindando a otros grupos aliados u opositores la posibilidad de mayor expresión y competitividad en las luchas por el control del Estado y sus órganos. Al rehusar establecer su hegemonía por medio de los partidos políticos y de diversos mecanismos relacionados con los procesos ideológicos de la formación de opi-

nión pública, las clases tradicionalmente dominantes en Centroamérica han tenido que optar por la transformación de los aparatos militares en una especie de brazo o partido político de su propiedad, una extensión directa de sus poderes de dominio autoritario y exclusivista sobre la totalidad de la sociedad, sin darse cuenta de las limitaciones intrínsecas de la institución militar para lograr una efectiva dominación político ideológica de la población y, mucho más, para resolver los problemas del desarrollo económico y social dentro del marco de la integración nacional. Como más allá del divisionismo y el mantenimiento de los privilegios históricos de clase, han existido casi siempre mayorías sin posibilidad de expresión político—electoral que han intentado precisamente por la vía de la formación de partidos políticos el lanzamiento de proyectos de desarrollo de mayor alcance y beneficio colectivo, las élites militares se han perfilado entonces doblemente como detentadoras de una fuerza coercitiva implacable y como defensoras de los monopolios y fueros de los de arriba, al par que ilegítimas representadoras del interés nacional. El resultado ha sido una tensión permanente en el interior de estas sociedades, por parte de múltiples clientelas de las clases medias y populares subordinadas, para que se logre un mayor equilibrio redistributivo (no necesariamente un vuelco revolucionario) y una cierta posibilidad de restringir el ámbito de la intervención militar sobre las instituciones de la sociedad civil y del Estado. Esto ha significado una aspiración generalizada de contar con sistemas políticos estables que garanticen elecciones con escogencia efectiva y no impuesta de representantes de diversos sectores de opinión, así como el deseo de ampliar los espacios para la organización política autónoma de esos sectores, lo que casi siempre ha significado a la par de grupos de presión y sindicatos, sobre todo a partidos políticos los cuales, aunque puedan tener raíces clientelistas y difusas desde el punto de vista de intereses directos de clase, puedan no obstante servir de medios para fortalecer la sociedad civil y ejercer alguna influencia sobre la sociedad política, o sea el Estado. Han sido las limitaciones que han tenido los partidos para mediar, entre por una parte, la sociedad civil debilitada por el dominio oligárquico y, por otra, el Estado, lo que ha conducido a la crisis y la hipertrofia participativa y representativa, transformada en una crisis de autoridad casi permanente cuya solución no radica en la aplicación creciente de la fuerza militar. Esta última lo que crea es una ma-

yor deflación política e ideológica, aplastando las resistencias anti-oligárquicas y pluralizantes, en un *círculo vicioso* (altamente costoso) que asfixia los intentos de construir una institucionalidad partidista y político-electoral viable, al menos por el momento y casi sin excepciones. Una resultante de este proceso crítico es que, la ya de por sí débil y fragmentada (en clases y clientelas) sociedad civil, no puede por tanto prolongarse y mucho menos fortalecerse por el lado político del Estado, lo que a su vez la viene a marginar y dividir aún más, dejándola bajo el arbitrio despótico de minorías monopolizadoras, voraces e irresponsables. Por supuesto, que éstas forman parte de la sociedad civil; pero bajo una forma exclusivista que alienta el uso de métodos de cooptación, represión e integración selectiva de los sectores subordinados que son así literalmente “descabezados” de líderes, agentes y recursos de movilidad, ascenso y presión en pro de sus propios intereses, sean estos diversos o, en veces, unitarios. Esto significa que la profunda escisión de la sociedad civil se ve continuamente reforzada y amplificada desde los órganos militarizados del Estado. Separado y aislado de un inmenso y mayoritario segmento de la sociedad civil que es visto como el objeto simple de aplicación de la fuerza coercitiva, este tipo de Estado busca generalmente el apoyo de grupos para-militares ubicados estratégicamente en el seno mismo de aquel segmento.

Los contextos históricos concretos dentro de los cuales se fue forjando esta opción, y se reconfirma sistemáticamente, han sido diversos y no coinciden siempre en una cronología lineal, razón por la cual deben estudiarse en detalle y por separado, algo que bajo concepto alguno se pretende hacer aquí. Lo que sí aparece con bastante uniformidad fatídica en el escenario histórico, es que los establecimientos militares centroamericanos al servicio de la fórmula de la dominación oligárquica, se desarrollaron y profesionalizaron (al menos a nivel del cuerpo de oficiales) mucho *antes* que logran hacerlo *otros* órganos de la sociedad civil y política, como los partidos políticos y los sistemas electorales. Aún más, nacieron las modernas instituciones militares dentro del marco de dictaduras personalistas o “simples” al estilo, por ejemplo, de Ubico, Martínez, Carías o Somoza— empuñadas en asfixiar precisamente la construcción de partidos y de institucionalidad política relativamente autónoma frente a las clases dominantes. Consecuentemente en la organización y conciencia colectiva y corporativa de los militares, quedó desde un

principio inscrita la fórmula del accionar represivo anti-partidista, como una función esencial. Esto ha llevado a la destrucción de los múltiples esfuerzos realizados desde el siglo XIX para sacar a la sociedad civil de su carácter primitivo, raquítrico y excesivamente fragmentario a través de la fundación de partidos políticos destinados a enlazar *orgánicamente* los ámbitos público y privado, el Estado y la Sociedad.

De lo anterior extraemos la conclusión de que los militares no han sido el reemplazo automático de estructuras partidistas ineficaces que decayeron, sino la causa misma de que éstas nunca (o casi nunca) hayan podido surgir y florecer hasta alcanzar una institucionalidad viable al estilo costarricense. Desde aquí surge esa imagen de desorden, anarquía e impredecibilidad de la política centroamericana, la misma que fomentan y luego aducen los militares para sostener su control del Estado en muchos casos más allá de lo que ameritaría su papel de “simples defensores e instrumentos” del poder oligárquico. Introducen el caos en la sociedad civil y luego aparecen como los salvadores del orden y la ley. Tal es la lógica (o la ilógica) colectiva que conduce a los perennes problemas que tienen que ver en Centroamérica con la debilidad del liderazgo político civil; la extrema personalización o faccionalización de los conflictos de intereses; el clientelismo abusivo que impide obtener consensos nacionales; los problemas del reclutamiento, diferenciación y legitimación de las élites; la polarización y desorientación ideológica; la inescapable fragilidad del balance entre participación e institucionalización políticas; la tendencia de los conflictos a extenderse más allá de lo razonablemente esperable y las dificultades para encapsularlos, sometiéndolos a un manejo negociado en ámbitos o arenas más restringidas; etc. A saber, los dilemas que engendra la ausencia o insuficiencia del *Príncipe Moderno* al cual recomendaba Antonio Gramsci para el logro de la organicidad y la vertebración de lo socioeconómico con lo político, en una palabra, de la *hegemonía*, sin la cual es inalcanzable cualquier proyecto nacional de desarrollo y modernización.

A todo lo ancho y lo largo del Istmo observamos ahora al igual que en el resto de la América Latina, la crisis del pretorianismo anti-partidista y la toma de conciencia de que es indispensable construir o reconstruir los sistemas políticos civiles en aras de la solución de cualesquiera *otros* problemas que existan en la agenda colectiva. La solución del orden no está en la fuerza sino en la legítimi-

dad combinada con la eficiencia organizativa y política; en la libertad y la lucha contra la ignorancia como los medios de lograr que la sociedad civil exprese y comience a resolver sus problemas con métodos civilizados y eficaces, estableciendo los mecanismos que produzcan la suficiente integración nacional por encima de los clientelismos y las segmentaciones. En esta ruta los dogmatismos y los extremismos solo pueden venir a agudizar la crisis de la integración tanto nacional como regional, que en el caso centroamericano, están resueltas solo muy parcialmente, a pesar de tanto y desesperado esfuerzo. No podemos en esta ocasión entrar a analizar otros factores de carácter geopolítico que gravitan alrededor de la intervención de las grandes potencias de nuestro tiempo en la agudización de esa crisis, apoyando precisamente posiciones extremas inconvenientes desde el punto de vista de lo que al menos queda planteado escuetamente en este esbozo del problema regional.

El criterio que debe prevalecer en este asunto es que dicha intervención solo tiene verdaderos alcances y consecuencias efectivas si se ejerce por medio de agentes internos que se alimentan de las polari-

zaciones irresueltas dentro del sistema social y político local y regional, las que repercuten a su vez, muy negativamente sobre la pauta del crecimiento económico continuado. No hay causas únicas a las cuales siempre correspondan los mismos efectos, como pensaba en estas materias Emile Durkheim a finales del siglo pasado. No puede por tanto creerse que la construcción de partidos e institucionalidad política, sea el factor exclusivo que al fallar provoque la crisis. Pero sí es quizás el de mayor peso desde la perspectiva adoptada en estas líneas y a la solución de los problemas derivados, deben políticos y científicos dedicarse con la mayor seriedad, objetividad y racionalidad, si la alternativa es salir del caos y el desgaste que alientan la intervención foránea y el subdesarrollo. Es por esto que las falacias de la concepción dualista del desarrollo deben combatirse con hipótesis alternativas, menos fatalistas y mecanicistas, que permitan un accionar y un pensar más abierto y flexible que contemple opciones hasta ahora inexploradas y a lo mejor inesperadas, ayudando a construir así la supremacía de la razón sobre la fuerza, de la libertad sobre el despotismo.